

Santiago, diez de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Carlos Humberto Muñoz Obreque e interpone reclamo de ilegalidad en contra de la resolución contenida en Oficio N°E21887 del Consejo para la Transparencia, recaída en el amparo ROL C-6835-21, *“que declara la negación de la solicitud realizada por este reclamante en contra de la Ilustre Municipalidad de Colbún por no informar los nombres, correos electrónicos y número móviles de los concejales electos para el período 2021-2025”*.

Señala que, con fecha 30 de agosto de 2021, realizó una solicitud de información ante la Municipalidad de Salamanca, requiriendo el listado de los nombres de los concejales y/o concejalas electas, correo electrónico y número móvil de contacto para el periodo 2021-2025, cuyo registro asignado corresponde al MU279T0000991. Expone que, mediante el ORD. N°774, de 02 de septiembre de 2021, la Ilustre Municipalidad de Salamanca informa la nómina de concejales electos para el período en 2021-2024, denegando los correos electrónicos y el número móvil institucional de dichas autoridades, debido a que, a criterio de ese municipio, la divulgación de dicha información permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, lo que constituiría un serio entorpecimiento para el correcto y eficiente desarrollo del ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios. Respecto a los números telefónicos, la entidad informó que en su página web se encuentran publicados ciertos números para la atención ciudadana, con el fin de canalizar las comunicaciones y no distraer de sus funciones habituales a su personal.

Refiere que ante dicha negativa, con fecha 09 de septiembre de 2021, dedujo amparo en su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Salamanca, y el 26 de octubre recibió correo electrónico acompañando la Decisión Amparo Rol C6798-21, que deniega su petición de acceso a la información. Entre los argumentos esgrimidos por el Consejo para la Transparencia, en el



considerando cuarto expone que la jurisprudencia de ese ente “*ha sido el de reservarlos, en habida consideración a que la decisión de los órganos de la Administración del Estado de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos y/o casillas, obviando otros y, disponer de sistemas electrónicos integrales de atención ciudadana, es con la finalidad precisa de canalizar el flujo de comunicaciones y así evitar distraer de sus funciones habituales a su personal; caso contrario, se podría configurar la causal del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. Criterio aplicado en las decisiones de amparo Roles C5748- 18, C6109-18, C703-19, C5195-21, entre otras.*”

En cuanto a los derechos infraccionados, en primer término, señala que la Contraloría General de la República, en sus reiterados dictámenes, ha expresado que los concejales no tienen la calidad de funcionarios públicos ni mucho menos municipales. Agrega que, los roles que cita la recurrida para argumentar su tesis, se refieren tanto a personal del servicio público como municipal, calidad que no detentan los señores ediles.

En segundo lugar, indica que restringe la comunicación directa con los concejales, pues al querer aportar antecedentes para una fiscalización, primero pasaría por la autoridad municipal la información

Advierte que, para fundar su negativa a entregar la información reclamada, la Municipalidad de Salamanca hace referencia a meras opiniones y juicios fundados en hipótesis o conjeturas, no en hechos ya producidos y, por tanto, tampoco probados.

Concluye que la actuación del Consejo para la Transparencia al denegar su petición estaría vulnerando el artículo 14° de la Constitución Política de Chile.

Solicita revocar la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, ordenando que sea aceptado el reclamo de amparo para que dicho Consejo solicite la entrega de la información requerida a la Ilustre Municipalidad de Salamanca y, a su vez, que ésta sea publicada en su página web, para el conocimiento de toda la ciudadanía.



SEGUNDO: Que, informando por la recurrida, comparece don David Ibaceta Medina, abogado, y solicita el rechazo del recurso.

Hace presente que si bien el reclamante refiere expresamente recurrir en contra de la Decisión de Amparo Rol C6835-21, el Consejo estima que ello corresponde a un error de referencia, por cuanto los datos entregados en el cuerpo de su reclamación corresponden al amparo rol C6798-21.

Indica que, mediante Decisión de Amparo Rol C6798-21, adoptada con fecha 05 de octubre de 2021, el Consejo para la Transparencia (en adelante CPLT), declaró inadmisibile el amparo deducido por don Carlos Muñoz Obreque, en contra de la Municipalidad de Salamanca, por cuanto no existe una vulneración al derecho de acceso a la información de la parte recurrente, toda vez que la respuesta otorgada por el órgano reclamado se ajustó a la normativa vigente en materia de acceso a la información pública y a la jurisprudencia consistentemente sostenida por ese Consejo, por lo que el amparo deducido, adolecía de la falta de un elemento habilitante para su interposición.

Refiere que el derecho establecido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución, no es de carácter absoluto ya que admite excepciones, como las establecidas en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución, como también el artículo 21 de la Ley de Transparencia, (en adelante LT). Por lo tanto, no basta el simple hecho de que la información solicitada obre en poder del organismo requerido, o que dicha información haya sido financiada o elaborada con presupuesto público, para que inmediatamente se considere pública, pues ello solo importa una presunción legal de publicidad, que puede ser desvirtuada si se acredita fehacientemente la concurrencia de una causal de secreto o reserva, tal como lo ha declarado sucesivamente ese Consejo en este caso, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1 de la LT.

Sostiene que la publicidad de la información objeto del amparo, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por lo que



concorre en la especie la causal de reserva contenida en el numeral 1 del artículo 21 de la LT.

En concordancia con dicho artículo y con la jurisprudencia sostenida por dicho Consejo, aduce que el conocimiento de las casillas de correo electrónico de los concejales electos de la comuna de Salamanca, objeto de la solicitud de acceso que fundó el amparo rol C6798-21, permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, que constituirían un serio entorpecimiento en el correcto y eficiente desarrollo y ejercicio de la función pública por parte de sus funcionarios y unidades municipales, razón por la cual, dar a conocer la información solicitada de servidores públicos que se desempeñan en órganos obligados por la LT, atenta en contra de una eficiente gestión de comunicaciones institucionales, que se gestionan por medio de su centralización a los canales habilitados, que para dichos fines específicos, se informan a la comunidad. Cita las decisiones de amparo Rol C611-10 y Rol C136-13.

Asevera que, para resolver el amparo del recurrente, procedió a efectuar la revisión del sitio web del órgano recurrido, www.salamanca.cl, verificando que dicho Municipio informa teléfonos de contacto, por medio de los cuales se centralizan los requerimientos ciudadanos.

Sostiene que, lo resuelto por la Contraloría General de la República, respecto que los concejales no pueden ser considerados funcionarios públicos, se razona respecto a la responsabilidad funcionaria y no al acceso a información pública (dictamen N° 12.998-2011).

Agrega que los concejales cumplen funciones legalmente atribuidas por ley dentro de la respectiva Municipalidad, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 del DFL N° 1, del año 2006, del Ministerio del Interior, por lo que forman parte de la estructura funcional de un municipio, al conformar el Concejo Municipal, ejerciendo funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, aunque no detenten la calidad de funcionarios públicos.



Concluye que la decisión de Amparo Rol C6798-21, emitida por el CPLT, se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución; artículos 5°, 10°, 13, 24, 28 y 33 de la LT, y demás normas legales aplicables, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción.

TERCERO: Que, en consecuencia, teniendo en consideración el tenor de los fundamentos en que se apoya el Reclamo de Ilegalidad y lo informado por el CPLT, la controversia en estos autos se encuentra circunscrita a determinar si el Consejo obró conforme a derecho, al declarar inadmisibile el amparo deducido por el recurrente.

CUARTO: Que, previo a entrar al fondo, cabe recordar que, el Reclamo de Ilegalidad, -recurso que procede contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia- no es un recurso de alzada, ni de fondo.

En efecto, tal como su nombre lo indica, es una Reclamación, por decisiones ilegales que el referido organismo cometa en la dictación de sus Decisiones Amparos, motivo por el cual, la competencia de esta Corte se limita a verificar la existencia de las supuestas infracciones normativas que se esgrimen en contra de aquellas.

QUINTO: Que, la base fundamental del principio de transparencia se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, que dispone: *“Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”*

SEXTO: Que, de lo preceptuado por la Carta Fundamental, se deduce que la publicidad es un principio constitucional, de orden



general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen.

Dicho principio se recoge en las normas de la Ley 20.285, que consagró, a nivel de la normativa interna, el derecho fundamental del acceso a la información en el interés de avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la Administración del Estado y de la rendición de cuentas de la función pública que regula. Por ello que en su artículo 1° se plasmó el principio de la transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. De lo expuesto se desprende que la regla general es que la información generada, distribuida, recibida, gestionada y almacenada en y por la administración pública, es también pública y solo en ciertos casos, que constituyen la excepción, la información puede revestir el carácter de reservada y/o secreta.

El correlato de este principio se encuentra en el artículo 10 de la referida normativa, que consagra el derecho a toda persona de solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

SÉPTIMO: Que, entonces, de acuerdo con el principio de transparencia y publicidad, procede -por norma general- la entrega de la información, salvo que, efectivamente, aquella requerida se encuentre comprendida dentro de las situaciones de excepción a dicho principio. En este último caso, corresponde a quien lo alega, acreditar las causales de reserva.

OCTAVO: Que, por decisión de Amparo Rol C6798-21, adoptada con fecha 05 de octubre de 2021, el Consejo para la Transparencia, en resumen, resolvió:

“(…)

4). *Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado al presente amparo, se advirtió que la información reclamada –esto es, correos electrónicos y teléfonos institucionales–, ha sido declarada como*



reservada por este Consejo de manera sostenida, de acuerdo a la causal de reserva prevista en el artículo 21, N°1 de la Ley de Transparencia, por cuanto dar a conocer dichos datos de contacto, podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En razón de ello y conforme a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se dispuso, mediante oficio N° E20570, de 01 de octubre de 2021, solicitar a la parte reclamante subsanar su presentación. En el aludido oficio se advirtió expresamente a la parte recurrente que, en caso de no subsanar su reclamo en el plazo de 5 días hábiles en los términos indicados precedentemente, éste se declararía inadmisibile.

5) Que, en respuesta a lo anterior, con fecha 02 de octubre pasado, el reclamante señaló, en síntesis, que “(...) Debe considerarse que la Contraloría General de la República ha explicitado a través de los dictámenes N°s. 12.998, de 2011, y 74.983, de 2012, entre otros, que los concejales no tienen el carácter de funcionarios públicos ni municipales, en consecuencia, no les resulta aplicable afirmar que dicha petición entorpecería una función pública. Por el contrario, he requerido esta información como parte del nexo que se establece el ciudadano con el representante edilicio. No es posible entonces estimar que la petición correos institucionales vulnere el derecho a la intimidad de las personas, toda vez que, como se señaló, ella en el caso concreto no reviste el carácter de personal. De sostener la tesis de que afectaría la vida privada de las personas, ¿cómo podrá entonces la ciudadanía pueda aportar antecedentes para la fiscalización de ciertas materias al concejal en ejercicio, si tal correo o teléfono le ha sido vetado a los electores? ¿Será que a ciertos ciudadanos se les pueda conceder ese privilegio y a otros no? (...)”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad de la reclamación deducida, primeramente, es necesario determinar si ésta cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.



2) Que, es preciso señalar que el artículo 24 de la Ley de Transparencia al referirse al objeto al que se extiende el amparo por denegación de acceso a la información dispone: "Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información". Por su parte, el inciso 2º agrega: "La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran".

3) Que, lo requerido corresponde a los números de teléfonos y las casillas de correos utilizados por autoridades o funcionarios para el cumplimiento de sus funciones públicas, las que son proveídas y financiadas por el servicio. Así, se trata de información elaborada con presupuesto público, por lo que en virtud del artículo 11, letra c), de la Ley de Transparencia, se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones indicadas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. A su vez, dicha disposición legal establece como causales para declarar el carácter secreto o reservado de determinada información, entre otras, que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

4) Que, respecto de los números de teléfonos en comento, el criterio de este Consejo, desarrollado en los considerandos 8º y 9º de la decisión de amparo Rol C611-10, extendido luego a los correos electrónicos institucionales en la decisión de amparo C136-13, ha sido el de reservarlos, en habida consideración a que la decisión de los órganos de la Administración del Estado de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos y/o casillas, obviando otros y, disponer de sistemas electrónicos integrales de atención ciudadana, es con la finalidad precisa de canalizar el flujo de comunicaciones y así evitar distraer de sus funciones habituales a su personal; caso contrario, se podría configurar la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Criterio aplicado en las decisiones de amparo Roles C5748- 18, C6109-18, C703-19, C5195-21, entre otras.



5) *Que, en este mismo orden de ideas, de la revisión del sitio web de la Municipalidad de Salamanca, disponible en <http://www.salamanca.cl>, se observa que en la página principal se publican determinados números telefónicos para la atención ciudadana.*

6) *Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo estima que, en la especie, no existe una vulneración al derecho de acceso a la información de la parte recurrente, toda vez que la respuesta otorgada por el órgano reclamado se ajusta a la jurisprudencia sostenida de esta Corporación, por lo que el amparo deducido, adolece de la falta de un elemento habilitante para su interposición, en cuyo mérito se declarará inadmisibile. ”*

NOVENO: Que, para resolver, cabe precisar la normativa de la Ley N° 20.285, aplicable al caso de autos, así:

El “artículo 11.- El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. ”

En el artículo 15, de la ley en comento, se dispone: *“Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar. ”*

A su vez, el “artículo 21.- *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:*



1.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

(...) c). Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.”

A su vez, el artículo 33, establece las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, disponiendo que corresponde a esta corporación, “(...) resolver sobre los reclamos por denegación de acceso a la información, y en razón de ello, conocer y decidir sobre la procedencia de entregar determinada información en poder de los órganos de la administración, en alguna de las formas que se precisan en esta ley.”

Por otro lado, en el articulado del Reglamento de la Ley de Transparencia, en lo atinente a la materia, dispone:

En relación con los supuestos de afectación de funciones, -motivo por el cual, el CPLT declaró inadmisibile el Amparo deducido por el reclamante- éstos se encuentran expresamente definidos en el **artículo 7º letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia**, bajo los siguientes términos:

(...) “Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”.

Concordante con lo anterior, del mismo Reglamento, el “Artículo 46.- Conocimiento y admisibilidad de los Reclamos y amparos. Los reclamos por infracción a las normas que regulan el derecho de acceso a la información serán conocidos por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en la primera sesión ordinaria que celebre con posterioridad a su presentación, o en la siguiente en que el volumen de trabajo lo permita. De resultar admisibles, ordenará que sean notificadas al órgano de la



Administración del Estado correspondiente y al tercero involucrado, si lo hubiere, mediante carta certificada.

Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisibile.”

DÉCIMO: Que, tal como se indicara en el motivo cuarto de la presente sentencia, en relación con la naturaleza jurídica del Reclamo de Ilegalidad, es dable concluir que, el CPLT argumentó fundadamente en su Decisión de Amparo C6798-21, pues expuso las razones que tuvo para declararlo inadmisibile, esto es, jurisprudencia de iguales casos; afectación del artículo 21 N° letra c) de la LT; y, que la Municipalidad cumplía con los requisitos para la obtención de la información que pretendía el requirente, a través de su página web, lo que fue verificado por dicho Consejo, puesto que se publicaban números de teléfonos, especialmente para dicho efecto y, por medio de los cuales se centralizan los requerimientos ciudadanos.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, y con respecto a la solicitud de información requerida por el recurrente, -correos electrónicos y números móvil de contacto de los concejales para el periodo 2021-2025, - el Tribunal Constitucional ha resuelto que: *“el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad”* (Sentencia Rol N° 389 de 28 de octubre de 2003, considerando 19). Enfatizando *“el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial (19 N°5), pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión, lógica e inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia”*.



Asimismo, ha sostenido que los correos electrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República, pues *“son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros. En nada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso interceptarlos o abrirlos”* (Sentencia Rol N° 2153, de 11 de septiembre de 2012, considerando 42).

Además, el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N° 2246-12, pronunciada con fecha 31 de enero de 2013, en requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, razonó que *“el acceso a comunicaciones privadas sólo puede permitirlo el legislador cuando sea indispensable para una finalidad de relevancia mayor, cuando sea necesario porque no hay otra alternativa disponible y lícita, bajo premisas estrictas, con una mínima intervención y nunca de manera constante y continua, sino que de forma limitada en el tiempo y siempre de modo específico, señalándose situaciones, personas y hechos”*.

DUODÉCIMO: Que, de igual forma, esta Corte de Apelaciones, en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2018, rechazó el reclamo de ilegalidad Rol N° 365-2018, reiterándose la interpretación que se viene sosteniendo, precisando lo siguiente: *“5º) En el mismo sentido, los correos electrónicos enviados o recibidos por funcionarios o autoridades públicas, como ocurre en este caso, en ningún caso revisten el carácter de actos administrativos, ya que constituyen decisiones formales que contienen declaraciones de voluntad, realizados en el ejercicio de la potestad pública. Muy por el contrario, los correos electrónicos son comunicaciones personales y privadas entre las personas que forman parte de la administración pública -como en este caso- y que sin duda facilitan el ejercicio de sus funciones propias; pero no resulta posible que estos reemplacen o puedan ser considerados*



actos administrativos, sino sólo se trata de comunicaciones informales. Idea que por lo demás también lo ha establecido el propio Consejo para la Transparencia cuando señala: “los correos electrónicos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que aquellos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decretados en casillas institucionales. En efecto se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o, de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la Administración del Estado y que no tiene la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social. (Amparo Rol N° C- 1220 – 17 4/ 8/ 2017)”.

DÉCIMO TERCERO: Que, según se ha venido relacionando, el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la Decisión de Amparo Rol N° C6798-21, adoptada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1219 de 05 de octubre de 2021, habrá de ser desestimado, por resultar acorde con el sustento fáctico y normativo aplicable, no vislumbrándose una ilegalidad en su actuar, toda vez, que el reclamante fundamenta su arbitrio en una interpretación particular de la normativa que invoca, contrastándola con la sustentada por el Consejo, lo que no alcanza para configurar la contravención a la legalidad que se reprocha.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo de la Constitución Política de la República, y artículo 28 de la Ley N° 20.285, se **rechaza**, sin costas el Reclamo de Ilegalidad deducido por don Carlos Humberto Muñoz Obreque en contra de la Decisión de Amparo C6798-21, dictada por el Consejo para la Transparencia en sesión de 05 de octubre de 2021.

Regístrese, comuníquese y, archívese en su oportunidad.



Redactado por la ministro María Paula Merino Verdugo.

Nº- Contencioso Administrativo-623-2021.

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por la ministra señora María Paula Merino Verdugo y ministro (S) señor Pedro Advis Moncada.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Maria Paula Merino V. y Ministro Suplente Pedro Pablo Advis M. Santiago, diez de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

